

RENTAS DEL TRABAJO Y FUTURO DE LAS PENSIONES. Especial atención a la situación de los mayores.

Agradecimientos.

Vila Tierno Francisco, Álvarez Cortés

Una de las cuestiones que preocupa con mayor intensidad a la sociedad es el derecho a percibir una pensión digna. Una pensión que permita a la persona y su familia tener una vida digna o decente. El trabajo que se presenta viene a examinar someramente la relación entre el trabajo decente y la protección social, en el sentido que la ausencia de un trabajo decente, conlleva a una reducción de los umbrales de protección social.

Pero en particular se hace respecto de una figura especialmente damnificada: la de los trabajadores maduros. Que pueden verse perjudicados por haber sido expulsados del mercado de trabajo

- siendo extremadamente complicada su reinserción o si lo hacen con trabajos, en muchas ocasiones, precarios
- o a causa de la expulsión prematura se complica el derecho al acceso a unas prestaciones de calidad en el nivel contributivo.

Siendo así, nos hemos propuesto, partiendo de los criterios de suficiencia y sostenibilidad de las pensiones, plantear un estudio que trate de analizar la protección que, respecto a dichas cuestiones, se pueden dispensar a este colectivo.

El principal problema que puede encontrarse en ese contexto, está referido, a la financiación de las necesidades que se derivan de la existencia de esta población más longeva, lo que ha provocado una transformación de nuestro ordenamiento jurídico en una dirección menos garantista a través de legislaciones de “emergencia” para recortar gastos.

La idea es la de recuperar a estos sujetos para una actividad productiva y que por ello puedan acceder a una pensión digna.

Estamos, por tanto, ante un gran problema económico y social como mantener el nivel de vida, de rentas y la inclusión social de los mayores, se enfrenta a una serie de variables macroeconómicas y sociales que inciden de forma adversa para la garantía de un Estado de Bienestar Social.

1) A nivel supranacional:

- La OIT viene a señalar que “el crecimiento de la fuerza de trabajo mundial no alcanzará para compensar una reserva de jubilados en rápido aumento, y someterá a presión tanto a los sistemas de pensiones como al mercado de trabajo en su conjunto.

- Se presenta como una preocupación común en el seno de la UE. Sin embargo, se puede observar como en las Decisiones de la UE (de 2015 y 2018) relativas a las orientaciones en política de empleo; no se encuentra una inclusión del colectivo de mayores como uno de los destacados en las actuaciones frente al desempleo. Las reformas de las pensiones deberán apoyarse en medidas que amplíen la vida laboral, como el aumento de la edad efectiva de jubilación, y enmarcarse en unas estrategias de envejecimiento activo.

2) A nivel nacional

Como se conocer el juego de competencias establecido en los arts. 148 y 149 de la CE atribuye la gran parte del desarrollo de estas políticas al Estado central. Las CCAA en materia de protección social solo tienen competencias desarrollo ejecutivo y el posible desarrollo de una protección a través de la asistencia social y alguna posibilidad “extraordinaria” de complementar prestaciones no contributivas en el sentido que marcó la STC 239/2002, de 11 de diciembre.

Donde sí se observan más posibilidades a nivel autonómico es a través del fomento del empleo, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. Pero en la mayoría de las políticas de empleo emprendidas por las CCAA se echa de menos una regulación más concreta de las medidas dirigidas a los mayores, si bien, antes de llegar a una afirmación definitiva habrá que revisar la normativa de desarrollo.

En cualquier caso, **el factor de referencia: trabajo decente**

Enlaza con una idea clave: la idea del “trabajo con derechos” . Se entiende una institución que “sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de:

- **acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo,**
- **la seguridad en el lugar de trabajo**
- **y la protección social para las familias,** mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social,

Es necesario, especialmente tras la **crisis económica** que ha supuesto:

- REDUCCIÓN DE SALARIOS Y DERECHOS LABORALES,
- AUMENTO DE CONTRATACIÓN LABORAL PRECARIA (TEMPORAL O PARCIAL),
- INCREMENTO DE DESEMPLEO y DEL DESEMPLEO DESPROTEGIDO,
- NUEVAS FIGURAS LABORALES QUE HUYEN DEL DERECHO DEL TRABAJO HACIA EL TRABAJO AUTÓNOMO...

El equilibrio entre Suficiencia y sostenibilidad y las rentas como destino y fin

Como no podía ser de otro modo, los mismos que provocaron la crisis económica de 2007 han sido los que han usado esta oportunidad para obtener rendimientos nuevos a través de la protección social privada. La lógica es clara. El sistema no es sostenible ha de reducir las prestaciones (ya que no se sabe porqué no se explora la vía de obtener nuevas fórmulas de ingresos).

Es posible que las prestaciones sean suficientes, cosa que habrá que aclarar, pues se trata de un concepto jurídico indeterminado. Pero no van a poder garantizar rentas completas de sustitución de los salarios dejados de percibir, por lo que los que se lo puedan permitir, acudirán a sistemas privados para su protección.

El legislador, quizás movido por los hilos de la política de austeridad diseñada por la UE, ha introducido importantes recortes en la prestaciones para los mayores. En especial, introduciendo el aún nonato factor de sostenibilidad e índice de revalorización.

Detrás está el mantener la viabilidad financiera del sistema. El problema es cómo encaja en una idea de “austeridad”, el dictado constitucional de pensiones “suficientes y adecuadas”.

Y más cuando la tasa de actividad es en nuestro país es baja y porque esta situación ha provocado que la tasa de dependencia -ratio de afiliados a la Seguridad Social dividido entre el número de pensionistas- haya disminuido de forma alarmante.

Si no hay cotizantes suficientes para el total de los pasivos, lo que ocurre cuando envejece la población o cuando los activos no tienen un salario decente para poder contribuir, el equilibrio financiero del mismo se sustenta sobre la base de que las cotizaciones sean suficientes para hacer frente a los costes de naturaleza contributiva en los importes que se reflejan en los Presupuestos de la Seguridad Social. Y si no lo es solo hay dos vías: aumentar los ingresos o recortar los gastos.

Siendo, evidentemente, la segunda de las vías la aceptada comúnmente y sin reparos por los gobiernos independientemente de la ideología que tengan.

Si no nos damos cuenta que la protección de las personas que otorga el sistema de bienestar es una cuestión más relacionada con la riqueza del país y su correcta redistribución, más que del nivel de empleo o del envejecimiento de la población, la única vía que quedará será el recorte y la pérdida de la capacidad adquisitiva de las pensiones, teniendo en cuenta que, la Seguridad Social al ser un derecho prestacional, según nuestro TC, tiene los límites de las posibilidades económicas del sistema.

En las circunstancias actuales no se puede asegurar que las condiciones de acceso a la prestación y la cuantía de las mismas sean o no modificadas en el futuro.

- Sería necesario que hubiera un pacto de Estado para determinar que se entiende cómo suficiente y adecuadas o revalorizadas periódicamente
- Explorar nuevas fórmulas de financiación